



JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-037/2023

ACTORA: [REDACTED]

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ÓRGANO DICTAMINADOR DE LA
ALCALDÍA TLALPAN

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA
LETICIA MERCADO RAMÍREZ

SECRETARIA: ELIZABETH
VALDERRAMA LÓPEZ

Ciudad de México, trece de abril de dos mil veintitrés.

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha determina **revocar** los dictámenes con folios **IECM-DD19-000224/23** e **IECM-DD19-000138/24** que recayeron a los escritos de aclaración relacionados con los Proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024, denominados ambos “CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA”, emitidos por el Órgano Dictaminador de la Alcaldía de Tlalpan, y ordenar a la Dirección Distrital 19 del Instituto Electoral de la Ciudad de México realizar todas las acciones necesarias para que dichos proyectos participen en la referida consulta ciudadana.

GLOSARIO

Actora o parte actora

[REDACTED]

Alcaldía

Alcaldía Tlalpan

Autoridad responsable u Órgano Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan

Dictaminador

<i>Código Electoral</i>	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Consulta</i>	Consulta sobre Presupuesto Participativo 2023-2024
<i>Constitución Local</i>	Constitución Política de la Ciudad de México
<i>Constitución Federal</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Convocatoria</i>	Convocatoria Única para participar en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024, aprobada mediante acuerdo IECM/ACU-CG-007/2023
<i>Dirección Distrital</i>	Dirección Distrital 19 u Órgano Desconcentrado correspondiente a la Dirección Distrital 19 del Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Instituto local</i>	Instituto Electoral de la Ciudad de México
<i>Ley de Participación</i>	Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
<i>Ley Procesal</i>	Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México
<i>Modificación de la Convocatoria</i>	La relativa al Acuerdo (IECM/ACU-CG-023/2023) del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba modificar los plazos establecidos para el registro y trámite de los proyectos propuestos por las personas habitantes de la Ciudad de México para el presupuesto participativo 2023-2024, previstos en las BASES SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA y SEXTA de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024
<i>Proyectos</i>	“CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA”, con folios IECM-DD-19-000224/23 y IECM-DD19-0000138/24, correspondientes a



	la Unidad Territorial Ex Hacienda San Juan de Dios, en la demarcación territorial Tlalpan
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Sala Regional	Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Suprema Corte	Suprema Corte de Justicia de la Nación
Unidad Territorial	Ex Hacienda San Juan de Dios, en la demarcación territorial Tlalpan

ANTECEDENTES

De la demanda, de los hechos notorios y del expediente al rubro citado, se advierte lo siguiente:

I. Proceso de registro de proyectos

a. **Convocatoria.** El quince de enero de dos mil veintitrés¹, el *Consejo General* emitió el acuerdo **IECM/ACU/CG-007/2023**, correspondiente a la “*Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024*”.

b. **Modificación de la convocatoria.** El seis de marzo, el *Consejo General* modificó los plazos establecidos en la *Convocatoria*. Dentro de las modificaciones se pueden advertir las siguientes:

Actividad	Plazo
Presentación de proyectos	Hasta el 20 de marzo

¹ En adelante las fechas se referirán al año 2023 salvo otra aclaración.

Actividad	Plazo
Cotejo y verificación de las solicitudes de registro	Del 29 de enero hasta el 22 de marzo
Dictaminación	Del 11 de febrero al 26 de marzo
Publicación de dictaminación de proyectos en la Plataforma de Participación	27 de marzo
Presentación de los escritos de aclaración	Del 28 al 31 de marzo
Redictaminación de proyectos	Del 1 al 3 de abril
Publicación de redictaminaciones en Plataforma de Participación, estrados de las direcciones distritales y oficinas centrales	4 de abril de 2023
Asignación de número aleatorio	7 de abril
Difusión de proyectos	Del 10 al 24 de abril

c. Presentación de proyecto. Dentro del plazo establecido en la *modificación a la Convocatoria*, la *parte actora* presentó los *proyectos*, para ser votados en la *consulta*.

d. Dictaminación de los proyectos. El diecisiete y veinticuatro de marzo, el *Órgano Dictaminador* determinó que los *proyectos* no eran viables por no ser viables ni factibles en los ámbitos técnico y jurídico.

e. Solicitudes de aclaración. Inconforme con la dictaminación, el veintinueve y treinta de marzo, la *parte actora* presentó sendos escritos de aclaración ante el *Órgano Dictaminador*.

f. Redictámenes negativos (actos impugnados). El uno de abril, el *Órgano Dictaminador* emitió los dictámenes con folios **IECM-DD19-000224/23** e **IECM-DD19-000138/24** que recayeron a los mencionados escritos de aclaración, en los cuales de nueva cuenta calificó como negativos los proyectos de la *parte actora* por considerar que no cumplieron con la factibilidad y viabilidad técnica y jurídica.

II. Juicio electoral TECDMX-JEL-037/2023

a. Demanda. El seis de abril, la *actora* presentó demanda de juicio electoral en contra de las dictaminaciones negativas de los *proyectos*.

Debido a que la demanda se presentó directamente ante este Tribunal, el citado seis de abril se ordenó a la autoridad responsable que le diera el trámite correspondiente.

b. Turno. El seis de abril, por acuerdo del Magistrado Presidente Interino de este Tribunal, se integró el expediente **TECDMX-JEL-037/2023**, y se turnó a la ponencia de la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, lo cual se cumplimentó el diez siguiente.

c. Recepción de constancias de trámite. El once de abril se recibieron las constancias de trámite del referido medio de impugnación.

d. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió el juicio y, al no existir diligencias pendientes de desahogo, se ordenó el cierre de instrucción.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia. El Pleno del *Tribunal Electoral* es **competente** para conocer y resolver los medios de impugnación

que se presenten y estén relacionados con los procesos de participación ciudadana.

En este caso, se actualiza la competencia porque la materia de la controversia son los dictámenes emitidos por el Órgano Dictaminador de una Alcaldía, mediante los cuales se determinó la inviabilidad de dos proyectos registrados para participar en la consulta de presupuesto participativo 2023-2024.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c) y l), numeral 5° y 122, apartado A, bases VII y IX de la *Constitución Federal*; 38 y 46, apartado A, inciso g) de la *Constitución Local*; 30, 165, párrafo segundo, fracción V, 171, 178 y 179, fracción II del *Código Electoral*; 102 y 103, fracción III de la *Ley Procesal*; así como 124, fracción V, y 135, último párrafo, de la *Ley de Participación*.

SEGUNDA. Requisitos de procedencia

El medio de impugnación cumple los requisitos de procedencia previstos en el artículo 47 de la *Ley Procesal*, como se explica enseguida.

1. Forma. La demanda fue presentada por escrito ante esta autoridad jurisdiccional; en ella se hace constar el nombre y firma de la *parte actora*, un [REDACTED] para recibir notificaciones, los actos impugnados, los hechos y agravios de la impugnación; se señalan los preceptos presuntamente violados y se ofrecen medios de prueba.

2. Oportunidad. El juicio se promovió de manera oportuna, tomando en cuenta que la demanda se presentó dentro del plazo establecido en la *Ley Procesal*.

De conformidad con el artículo 42 de la *Ley Procesal* todos los medios de impugnación previstos deberán interponerse dentro del plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que la *parte actora* haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable.

En este contexto, tomando en consideración que la publicación de las redictaminaciones se realizó el **cuatro de abril** a través de la Plataforma de Participación del *Instituto Electoral* -en términos de la Base Cuarta de la Convocatoria modificada- y que la demanda se presentó el **seis de abril**, resulta evidente que la demanda fue presentada oportunamente.

3. Legitimación. La legitimación consiste en la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para efecto de poder proceder legalmente, es decir, es la facultad de poder actuar como parte en el proceso.²

El presente juicio es promovido por parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 46 fracción IV y 103

² Concepto establecido en la Tesis Aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro **PERSONALIDAD, PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO, DISTINCIÓN** que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Novena Época, agosto de 2003 Materia Laboral, Tesis Aislada: IV.2o.T.69 L, página: 1796.

fracción III, de la *Ley Procesal*, puesto que se trata de una ciudadana que cuestiona la determinación de inviabilidad de los *proyectos* que presentó para participar en la *consulta*.

4. Interés jurídico. La *Sala Superior*³ estableció que, por regla general, existe interés jurídico si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial de la parte actora y si la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación.

Así, la *parte actora* cuenta con interés jurídico para interponer el presente medio de impugnación, toda vez que es la persona que registró los proyectos que, posterior a sus escritos de aclaración, fueron dictaminados negativamente.

5. Definitividad. No se advierte que en el caso deba de agotarse una instancia previa antes de acudir a este Tribunal Electoral a controvertir el redictamen emitido como respuesta a la aclaración promovida por la parte que registró un proyecto.

6. Reparabilidad. Los actos impugnados no se han consumado de modo irreparable, ya que de asistir la razón a la *parte actora*, se puede revocar y, en su caso, ordenar que se emitan nuevos dictámenes.

Una vez que se concluyó que se cumplen con los requisitos de procedencia, lo conducente es realizar el análisis de fondo de este asunto.

³ Véase la jurisprudencia 7/2002 de rubro “**INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO**”.

TERCERO. Precisión del acto impugnado, síntesis de agravios y pretensión de la *parte promovente*.

A. Precisión del acto impugnado

La *parte actora* cuestiona los **redictámenes** por los que se determinó que no eran viables los *proyectos* "CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA", cuyos folios son **IECM-DD19-000224/23 e IECM-DD19-000138/24**, emitidos por el *Órgano Dictaminador* el uno de abril, al considerar que no se cumplió con la factibilidad y viabilidad técnica y jurídica.

B. Agravios

En atención al principio de economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir los agravios, este *Tribunal Electoral* procede a enunciar los motivos de inconformidad de *la actora*:

La *parte actora* señala que los dictámenes impugnados incurren en indebida fundamentación y motivación, ya que la *autoridad responsable* inobserva el principio de exhaustividad omitiendo llevar a cabo un análisis puntual de los argumentos hechos valer en el escrito aclaratorio; además, es omisa en fundar y motivar su determinación, limitándose a repetir textualmente las mismas consideraciones que previamente había realizado en el primer dictamen, las cuales también adolecían de motivación y fundamentación.

Por lo que, la parte actora señala que parece que el órgano responsable ignora las reglas que establece la ley respecto a la dictaminación de proyectos, a pesar de que es muy clara. Ello es así, toda vez que el legislador, previó la posibilidad de que las personas participantes cuyos proyectos fuesen dictaminados en sentido negativo, tuvieran la posibilidad de presentar un escrito mediante el cual, hicieran del conocimiento del órgano que consideró inviables los proyectos, las razones, argumentos, motivos y fundamentos por las cuales consideraban incorrecta esa determinación y el por qué tendrían que haber sido declarados viables.

Lo anterior, trae aparejada la obligación del órgano dictaminador, de pronunciarse en el nuevo dictamen, respecto a todas y cada una de las razones precisadas en el escrito aclaratorio, con la finalidad de reconsiderar y modificar el sentido del dictamen primigenio, o bien confirmarlo, pero necesariamente fundando y motivando adecuadamente sus argumentaciones, ya que, de lo contrario, no tendría ningún sentido la intención de la norma de otorgar la posibilidad a la ciudadanía de expresar su desacuerdo con el dictamen negativo.

Aunado a lo anterior, el *órgano dictaminador* refleja una percepción sin fundamento e incongruente, ya que los proyectos se plantearon como una continuación al diverso proyecto de presupuesto participativo que resultó ganador para el ejercicio 2022, con lo que se acredita la necesidad comunitaria de la unidad territorial, la posibilidad técnica de ejecutar los proyectos y, además, se beneficiaría a más personas y hogares.

Agrega que la *autoridad responsable*, a pesar de las manifestaciones de los escritos aclaratorios, volvió a exponer lo mismo que en los dictámenes primigenios, siendo totalmente omisa en motivar debidamente sus argumentos.

Que el *órgano dictaminador* adjuntó una copia de la circular SAF/SE/005/2023, suscrito por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, sin especificar la razón por la cual es relevante en sus dictaminaciones, siendo que en ese documento se establece que los proyectos que involucren la entrega de ayudas o apoyos directos a personas o grupos sociales no deberán exceder del diez por ciento del total del monto del presupuesto participativo por alcaldía, de manera que legalmente es posible ejecutar los proyectos, con las limitaciones correspondientes.

Además, la *parte actora* señala que la *autoridad responsable* indicó que no se cumplía con el impacto de beneficio comunitario y público sin complementar con un argumento que fundamentara y motivara su determinación, por lo que, es evidente que no fue considerado lo expuesto en los escritos aclaratorios.

En cuanto al redictamen con folio **IEMC-DD19-000138/24**, la *parte actora* sostiene que el *órgano dictaminador* no fundó ni motivó la determinación respecto al rubro "*Posible afectación temporal que resulte del proyecto*", pues solo expuso que no se considera afectación ya que el beneficio es en un domicilio particular, lo cual, a consideración de la *parte demandante*, es

confuso porque si se propone que el proyecto sea ejecutado en domicilios particulares, no existiría una afectación temporal.

La autoridad responsable fue omisa en brindar motivaciones junto con el fundamento aplicable que justifique que haya determinado inviable el proyecto, ya que este se propone sea ejecutado en domicilios particulares, buscando optimizar el entorno mediante una mejora en la Unidad Territorial a través de la redistribución de recursos y la mejora de la eficiencia del gasto público.

C. *Litis* a resolver

Este Tribunal considera que la *litis* de este asunto consiste en determinar si los dictámenes impugnados están debidamente fundados y motivados.

CUARTO. Estudio de fondo. Para analizar los agravios es necesario exponer cuáles son las generalidades de la dictaminación de los proyectos sobre presupuesto participativo, así como los requisitos para que se considere que están debidamente fundados y motivados.

A. Naturaleza del presupuesto participativo

De conformidad con el artículo 116 de la *Ley de Participación*, el presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos económicos que otorga el Gobierno de la Ciudad para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo obras y

servicios, equipamiento y la infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

Por su parte, el artículo 117, primer párrafo, de la *Ley de Participación* prevé que el presupuesto participativo deberá estar orientado, esencialmente, al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.

En el tercer párrafo del mismo artículo, se dispone que los recursos del presupuesto participativo se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras, servicios, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.

También establece que su finalidad invariablemente consistirá en realizar mejoras a favor de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las Alcaldías deben realizar como actividad sustantiva.

En el siguiente párrafo se prevé que, cuando los recursos del presupuesto participativo se ejecuten en unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones y bienes de uso común.

En el quinto párrafo del artículo 117 de la Ley citada, se establece que las erogaciones con cargo al capítulo 4000 denominado

“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, sólo deberán ser ejecutadas en los casos en que las condiciones sociales así lo ameriten, o que el proyecto sea enfocado al fortalecimiento y promoción de la cultura comunitaria, bajo los criterios que establezca la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Como se observa, el presupuesto participativo es un mecanismo de participación ciudadana que permite a las personas habitantes de cada unidad territorial decidir sobre el ejercicio de una parte del presupuesto.

Esto a través de propuestas que realice la ciudadanía para obras, servicios, equipamiento e infraestructura urbana, espacios públicos, actividades recreativas, deportivas y culturales, reparaciones de áreas y bienes de uso común o cualquier mejora a las unidades donde habitan.

Incluso, si se cumplen los requisitos legales, pueden incluirse proyectos enfocados a la promoción de la cultura comunitaria.

Lo anterior, siempre que los proyectos tengan como destino el desarrollo comunitario, la reconstrucción del tejido social, la solidaridad de las personas y, en general, mejoras a la comunidad.

B. Generalidades del proceso de presupuesto participativo

B1. Emisión de la convocatoria. El artículo 120, inciso a), de la *Ley de Participación* establece que le corresponde al *Instituto Electoral* emitir la respectiva convocatoria.

Por su parte, el artículo 123 de la misma Ley prevé que el personal de las áreas ejecutivas y distritales del *Instituto Electoral*, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad, garantizarán que en cada una de las unidades territoriales se publiciten las distintas etapas de la consulta, entre ellas, la convocatoria.

B2. Asamblea de diagnóstico y deliberación. De conformidad con el artículo 120, inciso b) de la *Ley de Participación* en cada una de las unidades territoriales se llevará a cabo una Asamblea Ciudadana con el fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas. Para ello contarán con el acompañamiento del *Instituto Electoral* y de personas especialistas en la materia.

Cabe señalar que se elaborará un acta del desarrollo de la Asamblea y de los acuerdos que se tomen. En ella, también se asentarán las problemáticas y prioridades que podrán ser objeto de los proyectos de presupuesto participativo.

B3. Registro de proyectos. El artículo 120, inciso c), de la *Ley de Participación* establece, respecto a esta etapa, que toda persona habitante de una Unidad Territorial, sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el *Instituto Electoral* de manera presencial o digital.

B4. Validación técnica de los proyectos. El inciso d) del artículo invocado prevé que, en esta etapa, un Órgano Dictaminador evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto, para lo cual deberá contemplar **la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto y beneficio comunitario y público.**

Esto ocurrirá conforme al calendario que establezca cada Órgano Dictaminador, el cual será publicado en la Plataforma del *Instituto Electoral*.

Posteriormente, una vez que sean dictaminados los proyectos serán remitidos al *Instituto Electoral*.

B5. Día de la consulta. De conformidad con el artículo 120, inciso e), de la *Ley de Participación* los proyectos que sean dictaminados de manera favorable serán sometidos a consulta de la ciudadanía organizada por el *Instituto Electoral*. Ordinariamente, se realizará el primer domingo de mayo.

El artículo 122 de la misma Ley prevé que la consulta al presupuesto participativo se realizará de manera presencial. Pero el Consejo General del *Instituto Electoral* podrá aprobar la modalidad digital.

B6. Asamblea de información y selección. De acuerdo con el artículo 120, inciso f), de la *Ley de Participación*, después de la jornada consultiva se convocará a una Asamblea Ciudadana en cada unidad territorial, a fin de dar a conocer los proyectos

ganadores. También se conformará el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.

B7. Ejecución de proyectos. El inciso g) del artículo citado, establece que la ejecución de los proyectos se realizará en términos de la ley, por los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad Territorial.

B8. Asambleas de evaluación y rendición de cuentas. El artículo 120, inciso h) de la *Ley de Participación* prevé que en cada unidad territorial se convocará a tantas asambleas como sea necesario, a fin de que sean dados a conocer los informes sobre el avance del proyecto y ejecución del gasto de manera puntual.

C. Obligación de fundamentación y motivación de la etapa de validación

C1. Obligación general

En primer lugar, es necesario precisar que los artículos 14 y 16 de la *Constitución Federal* establecen la obligación de que toda autoridad que pueda incidir en los derechos de las y los gobernados se encuentre debidamente fundado y motivado.

En diversos precedentes⁴, la *Sala Superior* ha explicado que el deber de **fundamentación** consiste en expresar el precepto legal aplicable al caso. Mientras que la **motivación** es la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.

En ese sentido, concluyó que **la falta de fundamentación y motivación** es una violación formal que implica la ausencia de los requisitos indicados.

Es decir, la falta de fundamentación y motivación es la omisión total en que incurre la autoridad responsable, por no citar los preceptos aplicables y por no expresar las razones suficientes y adecuadas para hacer evidente la aplicación de las normas jurídicas.

Por otro lado, la *Sala Superior* distinguió que **la indebida fundamentación y motivación** ocurre cuando la autoridad responsable de un acto o resolución invoca algún precepto legal que no es aplicable al caso concreto. O bien, las circunstancias particulares del caso no actualizan el supuesto previsto en la norma invocada.

En ese sentido, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las circunstancias invocadas como motivo de la

⁴ Por mencionar algunos: las sentencias **SUP-RAP-517/2016** y **SUP-JDC-41/2019**.

emisión de un acto encuadran en la norma invocada como sustento de éste.

C2. Obligación de fundamentación y motivación por el Órgano Dictaminador

En el caso de la etapa de validación de los proyectos de presupuesto participativo, el artículo 126, último párrafo de la *Ley de Participación* establece que los Órganos Dictaminadores tienen la obligación de emitir un dictamen **debidamente fundado y motivado**, en el que exprese **clara y puntualmente** la factibilidad y viabilidad **técnica, jurídica, ambiental y financiera**, así como **el impacto de beneficio comunitario y público**.

Si bien es cierto que la ley citada no define en qué consisten los aspectos técnico, jurídico, ambiental y financiero, el artículo 126, párrafos tercero y cuarto, de la misma ley prevé las cuestiones que los Órganos Dictaminadores deben verificar para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos, como:

- Realizar un estudio de viabilidad y factibilidad de los proyectos de acuerdo con las necesidades y problemas a resolver.
- Establecer el costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que del proyecto se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los Programas de Gobierno y los

Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

- Verificar que los proyectos no afecten suelos de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental.

En ese sentido, debido a que tales cuestiones deben ser estudiadas y analizadas por el Órgano Dictaminador para emitir el dictamen correspondiente, deben verse reflejadas en éste, con el fin de cumplir con la obligación de **fundamentación y motivación**.

Además, el artículo 127 de la *Ley de Participación* dispone que el dictamen debe contener elementos como el nombre del proyecto, la unidad territorial donde fue presentado, elementos considerados para dictaminar, monto total de costo estimado incluidos los costos indirectos, razones por las cuáles se dictaminó negativa o positivamente el proyecto e integrantes del Órgano Dictaminar.

De ahí que, que el artículo invocado también se advierten elementos relativos a la debida fundamentación y motivación de los proyectos.

Cabe señalar que en la *Convocatoria* se reitera lo anterior, al establecerse que, con la finalidad de determinar la factibilidad de los proyectos específicos presentados, cada Alcaldía creará un Órgano Dictaminador que estará conformado por cinco personas especialistas, la persona Concejal que presida la Comisión de

Participación Ciudadana de la Alcaldía, dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, y la persona titular del área de atención ciudadana.

Asimismo, señala que, para ello, el Órgano Dictaminador evaluará la viabilidad técnica, jurídica, ambiental, financiera de cada proyecto, así como el impacto de beneficio comunitario y público.

En conclusión, **la debida fundamentación y motivación de la validación de un proyecto** –ya sea para dictaminarlo de manera favorable o desfavorable- **debe incluir:**

- a) De manera general, la expresión clara y puntual de la viabilidad:
 - Técnica
 - Jurídica
 - Ambiental
 - Financiera
 - Así como el beneficio comunitario y público que implicará el proyecto.

- b) Dentro de tales aspectos deberá razonarse, al menos, lo siguiente:
 - Las necesidades y problemas a resolver.
 - Establecer el costo (que deberá incluir los indirectos).
 - Tiempo de ejecución y posible afectación temporal en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, los Programas de Gobierno y los Programas Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

- La no afectación de suelos de conservación ecológica, áreas naturales protegidas, áreas de valor natural y ambiental.

C3. La etapa de validación técnica como acto complejo

En las sentencias del juicio **SUP-JDC-2427/2014** y del recurso de apelación **SUP-RAP-517/2016** –entre otros- la *Sala Superior* explicó que las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación **deben satisfacerse de acuerdo a la naturaleza particular del acto.**

En ese sentido, ha explicado que existen **actos complejos** que ocurren cuando la decisión final es producto del desahogo de distintas etapas o actos precedentes tendentes a emitir la resolución.

En el caso de este tipo de actos, la fundamentación y motivación puede estar contenida en cada uno de los actos que se llevan a cabo para tomar la decisión final.

Este Tribunal considera que el proceso de dictaminación de la viabilidad o factibilidad de un proyecto se trata de un acto complejo; porque está conformado por distintas etapas que conllevan a una decisión final.

En efecto, el artículo 126, segundo párrafo, de la *Ley de Participación* establece que se llevarán a cabo sesiones de dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo a cargo del Órgano Dictaminador.

En el tercer párrafo del mismo artículo se prevé que las personas integrantes del Órgano Dictaminador están obligadas a realizar un estudio de cada uno de los aspectos que comprende la viabilidad y factibilidad de los proyectos.

En el último párrafo del citado artículo, se dispone que, al finalizar el estudio y análisis de los proyectos, el Órgano Dictaminador deberá emitir un dictamen debidamente fundado y motivado, en el que se exprese clara y puntualmente la viabilidad y factibilidad.

Los artículos invocados permiten advertir que la determinación final sobre la viabilidad de un proyecto se trata de un **acto complejo**, porque está compuesta de diversas etapas como estudios previos de cada uno de los aspectos de viabilidad, sesiones de dictaminación y la emisión del dictamen, todos encaminados a concluir si un proyecto es viable o no.

De tal modo, el análisis sobre el cumplimiento de la obligación de fundar y motivar el dictamen sobre la viabilidad (o inviabilidad) de un proyecto del presupuesto participativo, debe ser analizado a partir de los diversos actos comprendidos en la etapa de validación o dictaminación de los proyectos.

C4. Inconformidades

En el apartado II, inciso B), Base Cuarta de la *Convocatoria* se estableció que las personas proponentes de aquellos proyectos que sean dictaminados negativamente podrán presentar su inconformidad, sin que ello signifique replantear el proyecto o proponer uno distinto.

Sino que únicamente se podrán realizar precisiones sobre la propuesta original y así orientar al Órgano Dictaminador para que, en su caso, se replantee el sentido de la dictaminación.

Conforme a ello, se advierte que mediante el escrito de aclaración el Órgano Dictaminador podrá reconsiderar sus razones sobre el proyecto específico dictaminado negativamente.

Para ello, el Órgano Dictaminador tomará en cuenta las aclaraciones señaladas por la persona promovente.

Evidentemente, para la emisión de la respuesta al escrito de aclaración el Órgano Dictaminador debe cumplir con la obligación de fundar y motivar según se ha explicado en los apartados que preceden.

D. Caso concreto

Constituyen un hecho notorio, de conformidad con el artículo 52 de la *Ley Procesal*, los dictámenes correspondientes a los *proyectos*, emitidos por el *Órgano Dictaminador* el uno de abril.

Lo anterior, porque se encuentran publicados en el “Sistema Integral de la Publicación de Proyectos”⁵ de la página del *Instituto local*⁶.

De esos documentos se advierte que ambos *proyectos* se denominan “CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA” y que su descripción es la siguiente:

CALENTADORES SOLARES MATERIALES: CELDAS SOLARES DE VIDRIO, BASES DE ACERO INEXIDABLE Y CONEXIONES DE TUBERÍA DE TUBO PLUS, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA PRIMERA ETAPA QUE SE LLEVÓ A CABO TODO CONFORME AL MARCO DE LA LEY Y PODER VENEFIICIAR (sic) A MÁS DE 45 FAMILIAS. CADA CALENTADOR VENEFIICIÓ (sic) ENTRE 5 Y 8 PERSONAS POR FAMILIA A (sic) IMPACTADO EN EL BOLSILLO DE CADA FAMILIA YA QUE SE VIO REFLEJADO EN EL RECIBO DE LUZ Y GAS Y SOBRE TODO QUE CON ESTAS NUEVAS ENERGÍAS SUSTENTABLES ESTAMOS CREANDO CONCIENCIA PARA CUIDAR EL PLANETA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.

Por otro lado, se advierte que en el apartado de “Estudio y análisis de la factibilidad y viabilidad”, en ambos *proyectos* el *Órgano Dictaminador* consideró que no se cumplieron con los rubros técnico y jurídico, así como el impacto de beneficio comunitario y público.

⁵ <https://siproe2023.iecm.mx/sistema-integral/>.

⁶ Por ello, es aplicable la jurisprudencia XX.2o. J/24, de los Tribunales Colegiados, de rubro “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”, J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470. XX.2o. J/24.

Al respecto, en ambos dictámenes impugnados se señala lo siguiente:

8.1 Técnica: NO ES VIABLE, TODA VEZ QUE ES CONTRARIO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 116 Y 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARÍA A SOLO UNOS PARTICULARES DEJANDO DE LADO EL BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD EN CONJUNTO.

8.2 Jurídica: NO ES VIABLE, YA QUE AL INSTALARSE, QUEDARÁ EN PROPIEDAD PRIVADA, NO CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS, Y EL BENEFICIO NO SERÁ PARA UN BIEN COMÚN. EL ARTÍCULO 116 Y 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLECE QUE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES PARA QUE SUS HABITANTES OPTIMICEN SU ENTORNO, PARA CUALQUIER MEJORA DE SUS UNIDADES TERRITORIALES, DESTINÁNDOSE ESTOS RECURSOS AL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y EN UNIDADES HABITACIONES, DEBERÁ APLICARSE EN ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN, Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN LEGAL.

...

8.5 Impacto de beneficio comunitario y público: NO HAY IMPACTO COMUNITARIO Y PÚBLICO ESTE PROYECTO YA QUE NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA DETERMINAR UN BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD EN CONJUNTO Y SOLO BENEFICIARÍA A SOLO UNOS PARTICULARES.

Ahora bien, en un primer apartado de su escrito de demanda, la *parte actora* aduce básicamente —como se dijo— que los redictámenes inobservan el principio de exhaustividad, debido a que el *Órgano Dictaminador* no atendió en su totalidad los planteamientos contenidos en los escritos de aclaración que presentó con el objeto de que los *proyectos* fuera redictaminados.



Y, después de esa manifestación general, la *actora* particulariza aquellos aspectos respecto de los cuales considera es indebida la dictaminación de la inviabilidad técnica y jurídica.

Por ende, este *Tribunal Electoral* estudiará primero la falta de exhaustividad de los redictámenes impugnados; y, posteriormente, el análisis se circunscribirá a determinar si la actuación de la *autoridad responsable*, al dictaminar la inviabilidad de cada uno de los rubros previamente mencionados, se ajustó a la legalidad de la que debe gozar cualquier acto de autoridad.

1. Falta de exhaustividad

La *demandante* sostiene que no se dio respuesta a todas las consideraciones expuestas en los escritos de aclaración.

Así, a continuación se inserta un cuadro para mostrar los planteamientos que, de manera similar, hizo la *parte actora* en los escritos de aclaración, así como la respuesta que le dio el *Órgano Dictaminador* en las redictaminaciones impugnadas:

Dictámenes primigenios	Planteamientos de los escritos de aclaración	Respuesta de la <i>autoridad responsable</i> en la redictaminación
Estudio y análisis de la factibilidad y viabilidad: 8.1 Técnica: NO ES VIABLE, TODA VEZ QUE ES CONTRARIO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 116 Y 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO YA	PRIMERO. El dictamen puesto a consideración me causa agravio debido a que la argumentación planteada por el órgano dictaminador no cuenta con razonamientos jurídicos y técnicos válidos, tomando en consideración que el proyecto denominado CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN	Estudio y análisis de la factibilidad y viabilidad: 8.1 Técnica: NO ES VIABLE, TODA VEZ QUE ES CONTRARIO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 116 Y 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dictámenes primigenios	Planteamientos de los escritos de aclaración	Respuesta de la autoridad responsable en la redictaminación
<p>QUE CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARÍA A SOLO UNOS PARTICULARES DEJANDO DE LADO EL BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD EN CONJUNTO.</p> <p>8.2 Jurídica: NO ES VIABLE, YA QUE AL INSTALARSE, QUEDARÁ EN PROPIEDAD PRIVADA, NO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS, Y EL BENEFICIO NO SERÁ PARA UN BIEN COMÚN. EL ARTÍCULO 116 Y 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLECE QUE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES PARA QUE SUS HABITANTES OPTIMICEN SU ENTORNO, PARA CUALQUIER MEJORA DE SUS UNIDADES TERRITORIALES, DESTINÁNDOSE ESTOS RECURSOS AL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y EN UNIDADES HABITACIONES, DEBERÁ APLICARSE EN ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN, Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN LEGAL.</p> <p>8.3 Ambiental: CON EL PROYECTO NO SE ADVIERTE QUE SE ALTERE EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, NI SE GENEREN DAÑOS AL AMBIENTE.</p> <p>8.4 Financiera: DE ACUERDO AL MONTO ASIGNADO PARA ESTA UNIDAD TERRITORIAL Y CONSIDERANDO EL PRECIO UNITARIO DEL INSUMO SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA EL ALCANCE FÍSICO Y META DE ESTE PROYECTO.</p>	<p>SEGUNDA Y TERCERA ETAPA, con número de folio ..., tiene la finalidad de brindar un beneficio a la comunidad, con la compra de calentadores solares a través del cual se fomenta un beneficio ambiental, y una necesidad de la población, ya que los gases emanados de un calentador de agua tradicional, afecta de manera significativa el medio ambiente, así como a las y los habitantes de la Unidad Territorial.</p> <p>SEGUNDO. Igualmente, el dictamen puesto a consideración me causa agravio por ser incongruente, debido a que el órgano dictaminador argumenta que el proyecto denominado CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA, no fue jurídica y técnicamente viable, aduciendo lo siguiente:</p> <p>...</p> <p>Siendo así que de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se establece lo siguiente:</p> <p>...</p> <p>Así las cosas, dicho supuesto es aplicable a la totalidad del Presupuesto Participativo asignado para cada Alcaldía, y siendo el objetivo del proyecto atacar una necesidad de la agenda de gobierno, que es la mejora del medio ambiente, encuadrando dentro de las necesidades sociales de mi Unidad Territorial, por lo cual la argumentación planteada por el órgano dictaminador sobre el no apego al artículo 116 y 117, son totalmente infundadas.</p> <p>Referente a la inviabilidad técnica el Órgano Dictaminador establece que: ...</p> <p>Así las cosas dicho argumento es totalmente incongruente, dado que el proyecto combate una de las necesidades de la población que es el cuidado del medio ambiente, el cual, sin duda alguna es una prioridad en</p>	<p>YA QUE CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARÍA A SOLO UNOS PARTICULARES DEJANDO DE LADO EL BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD EN CONJUNTO.</p> <p>8.2 Jurídica: NO ES VIABLE, YA QUE AL INSTALARSE, QUEDARÁ EN PROPIEDAD PRIVADA, NO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS, Y EL BENEFICIO NO SERÁ PARA UN BIEN COMÚN. EL ARTÍCULO 116 Y 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLECE QUE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ES PARA QUE SUS HABITANTES OPTIMICEN SU ENTORNO, PARA CUALQUIER MEJORA DE SUS UNIDADES TERRITORIALES, DESTINÁNDOSE ESTOS RECURSOS AL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y EN UNIDADES HABITACIONES, DEBERÁ APLICARSE EN ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN, Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE QUE DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN LEGAL.</p> <p>8.3 Ambiental: CON EL PROYECTO NO SE ADVIERTE QUE SE ALTERE EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, NI SE GENEREN DAÑOS AL AMBIENTE.</p> <p>8.4 Financiera: DE ACUERDO AL MONTO ASIGNADO PARA ESTA UNIDAD TERRITORIAL Y CONSIDERANDO EL PRECIO UNITARIO DEL INSUMO SE</p>



Dictámenes primigenios	Planteamientos de los escritos de aclaración	Respuesta de la autoridad responsable en la redictaminación
<p>8.5 Impacto de beneficio comunitario y público: NO HAY IMPACTO COMUNITARIO Y PÚBLICO ESTE PROYECTO YA QUE NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA DETERMINAR UN BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD EN CONJUNTO Y SOLO BENEFICIARÍA A SOLO UNOS PARTICULARES.</p> <p>8.6 Posible afectación temporal que resulte el proyecto NO SE CONSIDERA AFECTACIÓN YA QUE EL BENEFICIO ES UN DOMICILIO PARTICULAR</p> <p>8.7 Para la dictaminación se analizó el total del costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes: DE ACUERDO A LA TABLA DE MONTOS ASIGNADOS POR UNIDAD TERRITORIAL Y DERIVADO DEL ANÁLISIS PREVIO DE LOS PROYECTOS DE NATURALEZA SIMILAR, SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA EL ALCANCE FÍSICO Y META DE ESTE PROYECTO AL ALCANCE FINANCIERO.</p> <p>8.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen y/o el sentido de la votación de los especialistas: Consistente en CIRCULAR SAF/SE/005/2023</p>	<p>la agenda de gobierno, además de ser incongruente, debido a que dicho órgano dictaminó a favor de arreglar las fachadas deterioradas que dan un aspecto de inseguridad y vandalismo en la comunidad, lo cual entraría en el mismo supuesto, ya que la pinta de fachadas se realizaría en domicilios particulares, generando una laguna técnica jurídica dentro de las dictaminaciones emitidas.</p> <p>CUARTO (Sic). Que en los dictámenes correspondientes al ejercicio fiscal 2022 fue declarado como viables la entrega de calentadores solares con instalación en la Unidad Territorial que nos ocupa, y dicho proyecto fue ejecutado, por lo cual no existe impedimento alguno que pueda ser objeto de inviabilidad del proyecto objeto del presente curso.</p> <p>TERCERO (sic). Que la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 116, que el Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obra y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.</p> <p>Por lo cual el proyecto denominado CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA con número de folio ... cumple con lo establecido en dicho supuesto, ya que es un proyecto enfocado a cubrir las necesidades de mi Unidad Territorial, misma que se estableció en una Asamblea de Diagnóstico y Deliberación.</p>	<p>RECOMIENDA TENER EN CUENTA EL ALCANCE FÍSICO Y META DE ESTE PROYECTO.</p> <p>8.5 Impacto de beneficio comunitario y público: NO HAY IMPACTO COMUNITARIO Y PÚBLICO ESTE PROYECTO YA QUE NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA DETERMINAR UN BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD EN CONJUNTO Y SOLO BENEFICIARÍA A SOLO UNOS PARTICULARES.</p> <p>8.6 Posible afectación temporal que resulte el proyecto NO SE CONSIDERA AFECTACIÓN YA QUE EL BENEFICIO ES UN DOMICILIO PARTICULAR</p> <p>8.7 Para la dictaminación se analizó el total del costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes: DE ACUERDO A LA TABLA DE MONTOS ASIGNADOS POR UNIDAD TERRITORIAL Y DERIVADO DEL ANÁLISIS PREVIO DE LOS PROYECTOS DE NATURALEZA SIMILAR, SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA EL ALCANCE FÍSICO Y META DE ESTE PROYECTO AL ALCANCE FINANCIERO.</p> <p>8.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen y/o el sentido de la votación de los especialistas: Consistente en CIRCULAR SAF/SE/005/2023</p>

Como se observa, la *autoridad responsable* sólo reiteró lo considerado en los dictámenes primigenios y, además, omitió exponer consideración alguna en relación con el planteamiento de la *parte actora* en cuanto a que en 2022 fue declarado viable el proyecto correspondiente a la entrega de calentadores solares con instalación en la *Unidad Territorial*, el cual ya fue ejecutado.

Por tanto, el agravio sobre la falta de exhaustividad del *redictamen impugnado* es **fundado**, porque el *Órgano Dictaminador* omitió considerar un aspecto relevante que expuso la *parte demandante* en sus escritos de aclaración, en cuanto a que se dictaminó en forma positiva e incluso se ejecutó un proyecto sobre instalación de calentadores solares en la *Unidad Territorial*.

Tal argumento es relevante, porque ciertamente con él, la *parte actora* pretendió evidenciar que los *proyectos* se presentan en continuidad al proyecto ganador de 2022, lo cual estaría vinculado directamente con la razón fundamental en se sustentó la inviabilidad de dicho proyecto, respecto a las personas beneficiarias.

Sin embargo, al momento de emitir los redictámenes impugnados el *Órgano Dictaminador* fue omiso en valorar dicho aspecto planteado en el escrito de aclaración de la *parte actora*, en contravención al *principio de exhaustividad* que debe contener todo acto de autoridad y por ende, a los derechos en materia de participación ciudadana de la enjuiciante.

De ahí que **le asista la razón** a la *parte demandante* cuando aduce la falta de exhaustividad del *redictamen impugnado*.

2. Viabilidad técnica

En este apartado, se analizarán los planteamientos en contra de la sección sobre la viabilidad técnica de los redictámenes impugnados.

Sobre este punto, para evidenciar la falta e indebida fundamentación y motivación del acto cuestionado, la *parte actora* alega lo siguiente:

- La *autoridad responsable* reprodujo lo expuesto en los dictámenes primigenios y refleja una percepción personal, sin fundamento e incongruente, ya que los proyectos se plantearon como continuación del proyecto ganador en 2022.

Este órgano jurisdiccional considera que los agravios planteados por la *parte promovente*, atendiendo a la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 89 de la *Ley Procesal*, son **fundados**, en razón de lo siguiente.

El artículo 126, último párrafo de la *Ley de Participación* establece que el dictamen debe expresar clara y puntualmente la viabilidad o factibilidad técnica, entre otros aspectos.

Cabe indicar, que la citada ley y la *Convocatoria* no definen qué debe entenderse por viabilidad técnica.

No obstante, al acudir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española⁷, se advierte que la palabra “*viable*” alude a un asunto que por sus circunstancias puede llevarse a cabo.

Por su parte, el citado Diccionario define a la palabra “*técnica*” como el conjunto de procedimientos y recursos de una ciencia o arte.

Tales definiciones, aunadas a las reglas de la lógica y la experiencia de ejercicios participativos anteriores –de conformidad con el artículo 61 de la *Ley Procesal*–, permiten concluir que la viabilidad técnica consiste en que un proyecto pueda implementarse a partir de determinados procedimientos, métodos o actividades que permitan su materialización física u operativa⁸.

Con el objeto de analizar si le asiste la razón a la *parte actora* respecto a que la inviabilidad técnica sustentada por la *autoridad responsable* adolece de una indebida fundamentación y motivación, se reitera que, en cuanto a ese aspecto, en los redictámenes impugnados se indicó lo siguiente “*NO ES VIABLE, TODA VEZ QUE ES CONTRARIO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 116 Y 117 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARÍA A SOLO UNOS*

⁷ Consultable a través de la liga electrónica: <https://dle.rae.es/>.

⁸ Criterio similar sostuvo este Tribunal Electoral al resolver los Juicios Electorales TECDMX-JEL-049/2020, TECDMX-JEL-052/2020 y TECDMX-JEL-096/2022.

PARTICULARES DEJANDO DE LADO EL BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD EN CONJUNTO”.

De lo anterior, se desprende que la *autoridad responsable* declaró la improcedencia de la factibilidad técnica de los proyectos de *la parte demandante* sustentado en que la propuesta es para beneficio de sólo algunas personas siendo que el presupuesto participativo debe beneficiar a toda la comunidad.

Ahora, si bien el motivo que sustenta la inviabilidad técnica se relaciona con aspectos que corresponden al rubro de factibilidad jurídica, este *Tribunal Electoral* estima procedente analizarlo desde este momento —con independencia del estudio particular que de dicho rubro se realizará con posterioridad—, pues fue utilizado como soporte para declarar que los proyectos son inviables técnicamente.

De esta forma, este *Tribunal Electoral* considera que **asiste razón** a la *parte promovente* con relación a que existe una falta e indebida fundamentación y motivación sobre el aspecto técnico.

Ello, porque en atención a lo analizado por este *órgano jurisdiccional* al dar contestación al agravio relacionado con la vulneración al principio de exhaustividad, se advirtió el *Órgano Dictaminador* fue omiso en pronunciarse respecto al argumento de la *parte actora* consistente en que en 2022 fue declarado viable el proyecto correspondiente a la entrega de calentadores

solares con instalación en la Unidad Territorial, el cual ya fue ejecutado.

Por ende, ante tal omisión, la *autoridad responsable* incurrió en una contravención al *principio de legalidad*, al no establecer en el *acto impugnado* los motivos por los cuales consideró inviables inviable técnicamente los *proyectos* de la *parte demandante*, a pesar de que se trata de una continuación del proyecto ganador de 2022.

Ello, porque además, ese dato no le era desconocido, dado que la *parte demandante* lo refirió en los escritos de aclaración, aunado a que en los propios redictámenes impugnados se hizo constar que el proyecto presentado para 2023 se presentó en continuidad respecto del ejercicio fiscal 2022 y el proyecto presentado para 2024 se presentó como continuidad respecto del ejercicio fiscal 2023.

Asimismo, en la descripción de los *proyectos*, también se refirió tal aspecto, al indicar “PARA DARLE CONTINUIDAD A LA PRIMERA ETAPA QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME AL MARCO DE LA LEY Y PODER BENEFICIAR A MÁS DE 45 FAMILIAS, CADA CALENTADOR VENEFIÓ (sic) ENTRE 5 Y 8 PERSONAS POR FAMILIA”.

Ahora bien, es importante destacar que es un hecho público notorio —invocado en términos del artículo 52 de la *Ley Procesal*— para este *Tribunal Electoral* que en la Consulta de Presupuesto Participativo celebrada en 2022 —para su

ejecución en ese ejercicio fiscal— contendió y ganó el siguiente proyecto:

PROYECTO FOLIO IECM-DD16-00010/22		
NÚMERO	NOMBRE	
2	CALENTADORES SOLARES	SE EJECUTARÁ EN CASA PARA AYUDAR EL MEDIO HABIENTE (sic) Y LA ECONOMÍA DE CADA FAMILIA EL MATERIAL ES DE METAL, ALUMINIO Y VIDRIO

Lo anterior, puesto que está publicado en la página de internet del *Instituto Electoral*⁹.

Proyecto que además, se advierte que fue presentado por la actualmente *parte actora*, como se advierte de la información contenida en la página del *Instituto Electoral* respecto al registro histórico de resultados de consultas de presupuesto participativo¹⁰:



2022

CALENTADORES SOLARES

[12-042] EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, Tlalpan, 2022

Descripción: SE EJECUTARA EN CASA PARA AYUDAR EL MEDIO HABIENTE Y LA ECONOMÍA DE CADA FAMILIA EL MATERIAL ES DE METAL ALUMINIO Y VIDRIO

Clave Unidad Territorial: 12-042

Unidad Territorial: EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS

Folio: IECM-DD16-00010/22

Presupuesto asignado: \$601,732

Presupuesto ejercido: No se encuentra información por el momento

Promovente: AIDEE OLVERA CASIO

Año de ejecución: 2022

Así las cosas, este *órgano jurisdiccional* encuentra elementos suficientes para considerar que, tal como lo afirma la *parte*

⁹ Consultable a través de la liga electrónica: <https://siproe2022.iecm.mx/sistema-integral/>.
¹⁰ Consultable en la liga electrónica: <https://plataformaciudadana.iecm.mx/#/inicio/mecanismos-e-instrumentos/democracia-participativa/presupuesto-participativo/consulta-historicos/detalle-del-presupuesto/MTUwOTE%3D>.

actora, los proyectos que presentó, dictaminados como inviables por la *autoridad responsable*, **son continuidad del diverso que obtuvo el triunfo en el ejercicio participativo 2022**, ya que se refieren a la colocación de calentadores solares en la *unidad territorial*, por lo cual, incluso, en los redictámenes impugnados se precisa dicha continuidad.

De manera que el *Órgano Dictaminador* debió tomar en cuenta que, al tratarse de *proyectos* de continuación el beneficio para 2023 y 2024 no podía ser para toda la comunidad, sino sólo para las personas habitantes de la *unidad territorial* que no fueron beneficiadas en el ejercicio fiscal 2022.

En efecto, la naturaleza jurídica del presupuesto participativo es la de constituir un mecanismo de participación ciudadana que busca que los habitantes de la Ciudad de México decidan sobre la aplicación de un recurso público para optimizar su entorno, por lo cual persigue una finalidad colectiva.

Siendo que, en el caso, el beneficio para toda la comunidad que integra la unidad territorial se vincula precisamente a la continuidad del proyecto ejecutado en el ejercicio fiscal 2022 con los proyectos que la *parte actora* pretende que se sometan a la consulta ciudadana para 2023 y 2024.

Por ende, aun cuando la *autoridad responsable* fundamentó y motivó en este rubro la inviabilidad de los *proyectos*, lo cierto es que no tomó en cuenta que su finalidad radica en que los recursos del presupuesto participativo se utilicen a favor del resto

de las personas habitantes de la *Unidad Territorial* que aún no han sido beneficiadas con dichos recursos.

Lo cual queda claro desde el nombre de los *proyectos* presentados: “CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA”, del cual se infiere que sólo se dirige a un sector de la comunidad, puesto que se excluye a la que participó en la primera etapa, es decir, la que fue beneficiada con el presupuesto participativo de 2022.

En ese sentido el hecho de que, como lo sostiene la *autoridad responsable*, la aplicación de los *proyectos* en principio va dirigida a un cierto sector poblacional de la unidad territorial en realidad tiene una justificación material a partir de la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal 2022; de manera que la viabilidad de los *proyectos* de la *parte demandante* se encuentra justificada precisamente en los objetivos que persigue; esto es, beneficiar en algún momento a todas las personas habitantes de la unidad territorial.

Por ello, este *Tribunal Electoral* considera que, al momento de emitir las redictaminaciones impugnadas, la *autoridad responsable* indebidamente perdió de vista que tanto en la descripción de los *proyectos* como en los escritos de aclaración presentados por la *actora*, ésta especificó que se trataba de *proyectos* en continuación, lo cual evidentemente implicaba, dado su objeto de instalar calentadores solares, que todas las personas de la unidad territorial resulten beneficiadas de los recursos de presupuesto participativo.

En ese sentido, el *Órgano Dictaminador*, al omitir lo anterior, también dejó de considerar, para efectos de la viabilidad, que los proyectos en continuidad pueden representar una oportunidad para la ciudadanía votante para reconocer el beneficio colectivo logrado con una propuesta que fue ejecutada en su oportunidad.

De manera que, al ejecutarse parcialmente una acción que se perciba como favorable para el entorno de la unidad territorial podría ser del interés de la comunidad continuar con la mejora o beneficio logrado a fin de mejorar el entorno público, o implementar un servicio o solventar una problemática pública de manera integral.

Por las razones expuestas, este *Tribunal Electoral* no comparte la conclusión asumida por el *Órgano Dictaminador* en el sentido de que el proyecto tiene un beneficio individual, puesto que, además de que esa conclusión omitió el estudio de los planteamientos formulados por la *parte actora* en sus escritos de aclaración, también desatiende las condiciones particulares que han sido descritas, que incluso, son de conocimiento público y, por ende, se actualiza la indebida fundamentación y motivación del *redictamen impugnado*.

De ahí, que sea **fundado** el agravio en el rubro en estudio.

3. Viabilidad jurídica

En este apartado se analizarán los planteamientos en contra de la sección sobre la viabilidad jurídica de los redictámenes impugnados.

Al respecto, para demostrar la falta e indebida fundamentación y motivación de este rubro, la *demandante* aduce que el *órgano dictaminador* reiteró en los redictámenes impugnados lo sostenido en los dictámenes primigenios, sin motivar porqué se incumple lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la *Ley de Participación*.

Este *órgano jurisdiccional* determina que los agravios son **fundados**, en virtud de lo que se explica a continuación.

El artículo 126, último párrafo, de la *Ley de Participación* establece que el dictamen debe expresar clara y puntualmente la viabilidad o factibilidad jurídica.

Como se indicó, el término "*viable*" se refiere a que un asunto, por sus circunstancias, puede llevarse a cabo.

De tal modo, un proyecto será viable jurídicamente, cuando su propuesta coincida con la normativa aplicable; es decir, cuando ésta permita su implementación, o bien, cuando no la prohíba.

En el caso, la autoridad responsable estimó que los *proyectos* no cumplieran con la factibilidad jurídica porque al instalarse quedaría en propiedad privada y el beneficio no sería común; además

estimó que se infringiría lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la *Ley de Participación*.

Sin embargo, como lo refiere la *parte actora*, la *autoridad responsable* se limitó a reiterar lo expuesto en los dictámenes primigenios, sin analizar los argumentos que, en relación con éstos, formuló en los escritos de aclaración.

En efecto, el *órgano dictaminador* omitió pronunciarse en cuanto a que la *parte demandante* adujo que era incorrecto que en los redictámenes se considerara que los *proyectos* no se ajustaban a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la *Ley de Participación*, pues la *autoridad responsable* no consideró que tienen como finalidad brindar un beneficio a la comunidad, al fomentar un beneficio ambiental y una necesidad de la población, puesto que los gases emanados de un calentador de agua tradicional afectan de manera significativa al medio ambiente.

De manera que la *parte actora* formuló argumentos con los cuales trató de evidenciar que sus proyectos sí persiguen un beneficio para la colectividad.

Incluso, en cuanto a que el *órgano dictaminador* indicó que se instalarían en propiedad privada, la *parte demandante* aludió a que se habían aprobado proyectos sobre arreglo de fachadas deterioradas, lo cual encuadraba en el mismo supuesto.

De ahí que los redictámenes están indebidamente motivados, porque la *autoridad responsable* se limitó a reiterar lo expuesto en los dictámenes primigenios, sin dar respuesta a los

argumentos de la *parte actora* relativos al beneficio colectivo que representan.

Aunado a que omitió precisar el apartado específico de los artículos 116 y 117 de la *Ley de Participación*, que consideró incumplido.

En ese sentido, este *Tribunal Electoral* considera que la *autoridad responsable* no aportó elementos necesarios que permitieran a la *parte demandante* conocer la norma específica y las razones en que se basó para calificar los *proyectos* como inviables desde el punto de vista jurídico.

De tal surte, **asiste la razón** a la enjuiciante cuando manifiesta que existe una indebida fundamentación y motivación en relación al rubro jurídico del *redictamen impugnado*, toda vez sólo fundamentó la inviabilidad en los artículos 116 y 117 de la *Ley de Participación*; los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 116. *El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.*

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.

Artículo 117. *El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.*

Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.

Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente, Estos recursos se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para la (sic) mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar.

Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común,

Las erogaciones con cargo al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" sólo deberán ser ejecutadas en los casos en que las condiciones sociales lo ameriten, o que el proyecto sea enfocado al fortalecimiento y promoción de la cultura comunitaria, bajo los criterios que establezca la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, considerando las partidas y sub partidas del mencionado capítulo 4000. Dichas erogaciones no deberán superar el 10% del total del monto ejercido del presupuesto participativo.

Los proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, siempre y cuando cumplan el proceso establecido en esta Ley.

La Secretaría de Administración y Finanzas publicará los lineamientos y fórmula(s) necesaria(s) para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el año fiscal que corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de conformidad con el Decreto por el se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad y se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel de partida específica en más de un 10% respecto a la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y aprobar respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por demarcación, el que corresponderá al cuatro por ciento del presupuesto total anual

de éstas. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán aportar recursos adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto territorial y social; asimismo, podrán incluir los conceptos necesarios para su contexto local.

Sin embargo, la *autoridad responsable* no citó la porción específica de esas normas que estimó infringidas, aunado a que tampoco expuso los motivos concretos por los cuales dichos numerales resultaba aplicable al caso de la *parte actora*.

Cabe recordar, que la indebida fundamentación y motivación ocurre cuando la autoridad responsable de un acto o resolución invoca algún precepto legal que no es aplicable al caso concreto; o bien, las circunstancias particulares del caso no actualizan el supuesto previsto en la norma invocada.

De manera que, en el presente asunto, el *Órgano Dictaminador* incurrió en una indebida fundamentación y motivación dado que se limitó a citar los artículos aludidos, sin referirse a la porción específica que estimó incumplida; además de que al referir que no se cumplía con un beneficio comunitario, omitió analizar lo expuesto por la *parte actora* en sus escritos de aclaración, respecto a que sus *proyectos* atienden una necesidad de la población, que es el cuidado del medio ambiente.

Y lo cierto es que, como se vio, los *proyectos* se formularon en continuación respecto del proyecto ganador de la consulta de presupuesto participativo de 2022, de manera que su finalidad radica en que los recursos del presupuesto participativo 2023 y

2024 se utilicen a favor del resto de las personas habitantes de la *Unidad Territorial* que aún no han sido beneficiadas.

De manera que, en el caso, el beneficio comunitario acontece en forma continuada y conjunta a partir de la ejecución del presupuesto participativo de varios años, lo cual es una modalidad que permite el artículo 117, sexto párrafo, de la *Ley de Participación*.

Incluso, cabe destacar que la *parte actora* refiere que la *autoridad responsable* adjuntó a los redictámenes una copia de la circular SAF/SE/005/2023, suscrita por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, sin razonar su relevancia; siendo que, en todo caso, tal documento dispone que los proyectos que involucren la entrega de ayudas o apoyos directos a personas o grupos sociales no deben exceder el diez por ciento del total del monto del presupuesto participativo por alcaldía.

Al respecto, de los redictámenes impugnados se advierte que dicha circular fue citada en el apartado 8.8 “¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen y/o el sentido de la votación de los especialistas?”, sin exponer consideración alguna respecto al contenido de ese documento.

Sin embargo, lo cierto es que, como lo refiere la *parte actora*, dicha circular dispone que “los proyectos que involucren la entrega de ayudas o apoyos directos a personas o grupos sociales no deberán exceder el 10 por ciento del total del monto de presupuesto participativo por Alcaldía”.

De manera que la circular se refiere a una cuestión presupuestal, siendo que, en el caso, en ambos redictámenes se consideró que los *proyectos* eran viables desde un punto de vista financiero.

4. Impacto de beneficio comunitario y público

Respecto a este apartado, la *parte demandante* refiere que la *autoridad responsable* se limitó a señalar que los proyectos no cumplían con esta especificación, sin considerar lo señalado en los escritos aclaratorios.

Ahora bien, de los redictámenes cuestionados se observa que el *órgano dictaminador* sólo reiteró lo expuesto en los apartados previos —viabilidad técnica y jurídica— en cuanto a que no hay impacto comunitario porque sólo se beneficiaría a algunas personas.

Sin embargo, como se analizó previamente, el beneficio para toda la comunidad que integra la *unidad territorial* se vincula precisamente a la continuidad del proyecto ejecutado en el ejercicio fiscal 2022 con los *proyectos* que la parte actora pretende que se sometan a la consulta ciudadana para 2023 y 2024.

Esto es, al tratarse de proyectos de continuación, el beneficio para 2023 y 2024 no podría ser para toda la comunidad, sino sólo para las personas habitantes de la unidad territorial que no fueron beneficiadas en el ejercicio fiscal 2022.

Y, por el contrario, analizar de manera aislada los *proyectos*, sin considerar su vinculación con el proyecto ganador de 2022 llevaría a que el beneficio de éste quede inconcluso, lo cual repercutiría en el impacto social y de beneficio comunitario que se busca, en términos del artículo 116 de la *Ley de Participación*.

5. Conclusión

En las relatadas circunstancias, al resultar **fundados** los agravios, lo procedente es **revocar** los dictámenes que recayeron a los escritos de aclaración relacionados con los proyectos denominados “*CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA*”, emitido por el Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan.

6. Plenitud de jurisdicción

Ahora, resulta evidente que, ante la falta e indebida fundamentación y motivación de los redictámenes impugnados, este *Tribunal Electoral*, en una situación ordinaria, ordenaría a la *autoridad responsable* emitir nuevas redictaminaciones en las que subsanara las deficiencias apuntadas.

No obstante, si se procediera de dicha manera, se crearía una falsa expectativa de derecho para la *parte actora*, puesto que ello implicaría —de nueva cuenta— remitir los *proyectos* materia de controversia a la autoridad que, en dos ocasiones previas, se pronunció por declararlos inviables.

Aunado a que el reenvío conllevaría, de igual modo, un retraso en la impartición de justicia, en perjuicio tanto de la *parte demandante* como de la comunidad a cuya consulta podrían someterse los *proyectos*.

De esta manera, dado que en el presente asunto se cuenta con elementos para resolver la situación que ha de imperar respecto al proyecto, este órgano jurisdiccional, en plenitud de jurisdicción¹¹ —en términos del artículo 31 de la *Ley Procesal*—, procede a resolver lo que en Derecho corresponde.

Lo anterior, tomando en cuenta que la razón que sustentó la negativa contenida en los redictámenes sólo versó sobre el impacto comunitario de los *proyectos*, sin referirse a alguna otra cuestión técnica o jurídica, mientras que los rubros de viabilidad ambiental y financiera fueron aprobados.

Por ende, no se requiere el análisis de alguna cuestión que requiera un pronunciamiento especializado del *órgano dictaminador*, sino que es posible analizar la viabilidad de los *proyectos* a partir de aquí analizado.

Además, dado lo avanzado de las etapas en que encuentra la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2023 —en la cual,

¹¹ Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 165, del Código electoral y 31, de la Ley Procesal Electoral y la tesis LVII/2001 de rubro: “PLENITUD DE JURISDICCIÓN. LOS TRIBUNALES ELECTORALES UNIINSTANCIALES GOZAN DE ESTA FACULTAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA)” que indica que los tribunales electorales locales tienen plena facultad para examinar todas las cuestiones que omitieron resolver las autoridades responsables, atendiendo al principio de plenitud de jurisdicción de que se encuentran investidos, consultable en la Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 117-118, Sala Superior, tesis S3EL 057/2001.

acorde con la *Convocatoria*, el próximo veintiocho de abril iniciará la votación electrónica de los proyectos—, queda plenamente justificado el análisis del asunto con plenitud de jurisdicción.

En ese sentido, con independencia de lo resuelto en el estudio de fondo del asunto, el *Tribunal Electoral* advierte que las razones fundamentales que sustentaron la inviabilidad del proyecto se relacionan con que éste supuestamente generaría sólo un beneficio individual y no colectivo.

Cuestión que, como ha quedado evidenciado, no se actualiza ya que, en el caso, los *proyectos* presentados por la *parte actora* tienen como finalidad dar continuidad al beneficio que conlleva la utilización de los recursos públicos del presupuesto participativo en la *unidad territorial*.

Lo cual justifica que los *proyectos* se dirijan sólo a un sector de las personas que habitan la unidad territorial, puesto que, como lo manifestó en la correspondiente descripción, el motivo de la continuidad es que el beneficio abarque a toda la comunidad.

Respecto de lo cual, existe información pública que consta en la página de internet del *Instituto Electoral*, respecto al proyecto ganador de la consulta de presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2022, el cual efectivamente consistió en la instalación de calentadores solares, acorde con el proyecto que también presentó la ahora actora.

Por lo demás, la *autoridad responsable* no expuso alguna consideración adicional que sustente la inviabilidad de los

proyectos, como alguna situación específica que se haya presentado en la unidad territorial con la ejecución del proyecto ganador de 2022, respecto de cual se plantea ahora la continuidad; ni alguna circunstancia legal o técnica diferente o novedosa que impida considerar la viabilidad de los *proyectos*.

En ese sentido, en virtud de que en la especie no se advierte algún impedimento técnico ni jurídico que haya hecho valer la *autoridad responsable* de manera fundada y motivada para determinar la inviabilidad de los *proyectos*, este *Tribunal Electoral* considera que lo procedente es ordenar su inscripción para que participen en la Consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024.

Ello, además, porque en los redictamen impugnados se aprobó la viabilidad y factibilidad ambiental y financiera del proyecto y, si bien, no se aprobó el impacto comunitario, ello fue bajo la misma consideración expuesta en el aspecto técnico de viabilidad y factibilidad, es decir, el supuesto beneficio a pocas personas y no a toda la comunidad, lo cual ya fue desvirtuado en la presente resolución.

Sin que esta conclusión, se traduzca en una sustitución de este órgano jurisdiccional en las funciones y atribuciones del *Órgano Dictaminador*, pues el pronunciamiento que aquí se emite sólo se limita a declarar la procedencia de la viabilidad del proyecto en virtud de que aquél no justificó adecuadamente —en dos ocasiones— los razonamientos y motivos por los cuales debía declararse la improcedencia del registro de la propuesta.

En términos similares este Tribunal Electoral resolvió el juicio electoral **TECDMX-JEL-173/2022**.

QUINTA. Efectos de la sentencia. Toda vez que este *órgano jurisdiccional* declaró fundado lo impugnado por la *actora*, en aras de privilegiar su derecho en materia de participación ciudadana, lo procedente es:

1. **Se revocan los redictámenes** y, como consecuencia, los dictámenes correspondientes a los proyectos denominados “*CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA*”, emitidos por la *autoridad responsable*, en el marco de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024.
2. **Se ordena** a la Dirección Distrital 19 del *Instituto Electoral*—al ser la autoridad ante quien se registró los citados proyectos— realizar las acciones necesarias para que éstos participen en la *Consulta* de Presupuesto Participativo 2023-2024 que se celebrará en la Unidad Territorial Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan; esto es, para que sean registrados e inscritos en dicha consulta, con el objeto de que sean sometidos a votación electrónica y, posteriormente, a votación presencial.

Para lo anterior, la Dirección Distrital 19 del *Instituto Electoral* contará con el plazo máximo de **doce horas**, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia.

3. **Se vincula** a las áreas del *Instituto Electoral*, a la *autoridad responsable*, así como al propio Instituto, a coadyuvar en el cumplimiento de lo ordenado en este fallo.

Ello, tomando en consideración el contenido de la jurisprudencia **31/2002** dictada por la *Sala Superior*, de rubro **"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO"**¹².

4. De lo anterior, la Dirección Distrital 19 del *Instituto Electoral* **deberá informar** a este *Tribunal Electoral* dentro del plazo de **veinticuatro horas**, contadas a partir de la realización de los actos ordenados; remitiendo las constancias que así lo acrediten.
5. **Se apercibe** a las áreas del *Instituto Electoral*, al *Órgano Dictaminador* y al propio *Instituto Electoral* que, de no acatar lo ordenado en esta resolución, se les impondrá alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 96 de la *Ley Procesal*.

Por lo expuesto y fundado, se

¹² Consultable a través de la liga electrónica: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/>.

RESUELVE:

PRIMERO. Se **revocan** los redictámenes y, como consecuencia, los dictámenes correspondientes a los proyectos denominados “*CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN SEGUNDA Y TERCERA ETAPA*”, con folios **IECM-DD19-000224/23** e **IECM-DD19-000138/24**, emitidos por el Órgano Dictaminador de la Alcaldía Tlalpan, en el marco de la Consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024; en términos de lo razonado en la consideración **CUARTA** de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se **ordena** proceder en los términos precisados en el considerando **QUINTA** de esta resolución.

NOTIFÍQUESE como proceda.

PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tecdmx.org.mx), una vez que esta determinación haya causado estado.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el voto concurrente que emite el Magistrado Juan Carlos Sánchez León, mismo que corre agregado a la presente Sentencia como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.

INICIA VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA EL MAGISTRADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL TECDMX-JEL-037/2023.

Con fundamento en el artículo 185, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; así como, 9 párrafo primero y el diverso 100, párrafo segundo, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, emito respetuosamente el presente **voto concurrente**, ya que, si bien comparto las consideraciones que sustentan la sentencia, no coincido con los efectos plasmados en el punto resolutivo primero, en razón de lo siguiente.

En la sentencia se propone revocar los redictámenes emitidos por el Órgano Dictaminador responsable, a través de los cuales se determinó la inviabilidad de los proyectos presentados por la parte actora para los ejercicios dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro.

Por tanto, en el punto resolutivo primero se resuelve revocar los redictámenes y, como consecuencia, los dictámenes correspondientes a los proyectos específicos para la "*Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024*", propuestos por la parte promovente.

El motivo de mi disenso radica sustancialmente en que, desde mi perspectiva, en el punto resolutivo primero, solamente debe resolverse revocar los redictámenes respectivos, sin que sea materia de dicha determinación los dictámenes a que se hace referencia.

Lo anterior es así, ya que el acto impugnado por la parte actora son los redictámenes emitidos por el órgano responsable, los cuales fueron dictados como contestación a los escritos de aclaración presentados por la parte accionante para que la autoridad dictaminadora reconsiderara la inviabilidad de sus proyectos, emitidas en los primeros dictámenes.

Esto es, los redictámenes constituyen la última determinación que realiza la autoridad responsable respecto de los proyectos propuestos, lo que implica que con su emisión se dejen sin efectos los dictámenes primigenios y, en consecuencia, prevalezca la determinación final contenida en los redictámenes.

En el proyecto se razona que la pretensión fundamental de la parte actora es que se revoque el redictamen que presentó para ser votado en la Consulta de Presupuesto Participativo en la Unidad Territorial a la que pertenece y, como consecuencia, se determine su viabilidad.

Asimismo, el estudio de fondo se realiza analizando los agravios hechos valer por la parte actora, los cuales se encuentran enfocados a combatir únicamente los redictámenes en comento.

De manera que, si se tiene como actos impugnados los redictámenes emitidos por el Órgano Dictaminador responsable, la decisión de revocarlos solo puede tener efectos sobre dichas actuaciones y no trascender a los dictámenes primigenios.

En ese sentido, no comparto que el efecto de la revocación recaiga adicionalmente en los primeros dictámenes emitido por

la responsable, ya que los mismos no fueron los actos impugnados en el presente medio de impugnación.

Por las razones señaladas, es que me permito formular respetuosamente, el presente voto concurrente.

**CONCLUYE VOTO CONCURRENTES QUE FORMULA EL
MAGISTRADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN, EN
RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO
ELECTORAL TECDMX-JEL-037/2023.**

Licenciado Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracción XI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 26 fracción XV del Reglamento Interior de este Tribunal y dado que continúan las condiciones ocasionadas por la pandemia generada por el COVID-19; **CERTIFICO** que la Sentencia emitida en el Juicio Electoral TECDMX-JEL-037/2023; fue aprobada el trece de abril de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos a favor de las Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia Mercado Ramírez, así como de los Colegiados Armando Ambríz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, este último, quien emite voto concurrente. Voto que corre agregado a esta Sentencia. Constante de veintiocho fojas por anverso y reverso, a excepción de la última. DOY FE.